

EMERGENCIA SOCIAL TRAS LA SANITARIA

TEMA DEL DÍA
2 a 13 y editorial

Las víctimas de la crisis urgen el ingreso mínimo vital

El tercer sector reclama la implantación de la renta para paliar la devastación económica

Economistas niegan que este subsidio social desincentive el empleo, excepto el peor pagado

MANUEL DE GRAU
AUTÓNOMO CONSTRUCCIÓN

«Ahora toca rescatar a las personas»



CORINA BONDARI
PARADA HOSTELERÍA

«Solo nos llega para comida e hipoteca»



SERGI FONT
PROFESOR EDUC. FÍSICA

«Esta renta no es para apalancarse»



FERRAN NADEU



MORGUE. Transporte de ataúdes en el depósito de cadáveres habilitado en el aparcamiento del tanatorio de Collserola, ayer.

Salut hará el test a uno de cada tres ancianos internos

► Familias de fallecidos en geriátricos denunciarán al fiscal que no recibieron atención hospitalaria

PACTO DE ESTADO

Sánchez presiona al PP con el aval de los minoritarios al acuerdo

El 'pasaporte antivirus' levanta dudas legales y democráticas

CONTABILIDAD DISPAR

Discusión entre Gobierno y Generalitat por el número de fallecidos

La pobreza súbita, nueva emergencia

URGENCIA ▶ En un mes de confinamiento, las familias que piden ayuda se han disparado **DEMANDA** ▶ Entidades y economistas claman por el ingreso mínimo vital

ELISENDA
Colell

GABRIEL
Ubieto



Mientras el Gobierno se debate, interna y públicamente, sobre cuándo y cómo pondrá en marcha el nuevo ingreso mínimo vital, las entidades sociales le piden «extrema urgencia» y «rapidez» ante los estragos que está causando la actual crisis del coronavirus en los colectivos más vulnerables. Pues la cifra de los casi cinco millones de hogares, según los varemos del Eurostat del 2018, que en España vivían en la exclusión social antes del pandemia está escalando a marchas forzadas. El tercer sector y los sindicatos piden al Gobierno que proteja y asegure los ingresos de los más vulnerables para evitar así un brote de desigualdad una vez superada la actual emergencia. «Estas familias no pueden esperar. Y esta vez no se puede rescatar a los bancos, hay que salvar a las personas», insiste el presidente de la Plataforma del Tercer Sector Social, Luciano Poyato.

«En la anterior crisis tardamos más de un año en ver caras nuevas pidiendo comida en la entidad. Ahora no llevamos ni un mes de confinamiento y ya estamos viendo gente que no era habitual», explica Guillermo Fernández, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española. Una afirmación que comparten la mayoría de entidades sociales,

A diferencia de la crisis financiera del 2008, **las familias no tienen ahorros** para hacer frente a la situación

El tercer sector lleva ya 15 años pidiendo un ingreso mínimo **«más equitativo»** para toda España

pues la diferencia entre la recesión económica del 2008 y la crisis del coronavirus del 2020 es que las familias, esta vez, ya no tienen ahorros. Perder el trabajo, de lo que sea, significa quedarse sin nada. «Hace 10 años las familias tenían un colchón económico del que tirar los primeros meses, ahora esté colchón está deshilachado, por esto es tan necesario aplicar ya la renta. Si no tendremos un problema», sostiene el presidente de la Red Europea Contra la Pobreza (EAPN) en España, Carlos Usie. «Si tenemos que esperar varios meses, cuando salgamos del confinamiento nos encontraremos una sociedad dividida, polarizada y mucho más desigual. Hay que atajarlo cuanto antes, el Estado tiene que poner todos sus esfuerzos ahora», añade el presidente de la Plataforma Estatal del Tercer Sector, Luciano Poyato.

SIN REGLAMENTO EN CATALUNYA // El coronavirus ha extremado la necesidad, pero hace ya 15 años que las entidades sociales insisten en una renta mínima para España. Para las oenegés, es esencial acabar con la «desigualdad» del sistema de ayudas autonómicas. La renta mínima en Euskadi varía de 700 euros a mil euros al mes por hogar, y proteja a 32 de cada mil hogares vascos. En Andalucía, en cambio, cada hogar percibe entre 400 o 800 euros mensuales, pero este fondo solo llega a dos de cada mil familias. En el caso de Catalunya, la renta sigue sin tener reglamento que regule el acceso, y la ayuda solo llega al 40% de los hogares que viven en la pobreza se-



pronóstico

EL SUBSIDIO SALDRÁ EN MAYO

➔ El Gobierno confirmó ayer que pondrá en marcha en mayo su ingreso mínimo vital, del que se beneficiarán más de un millón de hogares. Si bien Escrivá afirmó ayer haberse enterado por la prensa del avance efectuado por Iglesias, Moncloa enterró la polémica.

➔ «Los equipos de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y del Ministerio de Inclusión están trabajando para poner en marcha dicho subsidio», confirmaron fuentes del Gobierno.

vera. «En función de donde vivas, la administración te va a arropar o no, por esto es necesario garantizar al menos un ingreso mínimo vital, que luego las autonomías puedan suplir o implementar», insiste Usie.

El Gobierno busca asistir a dicha urgencia con el que será el primer proyecto de renta mínima a nivel estatal. «Somos un caso único en la Unión Europea», explica el catedrático de economía en la Universidad de Sevilla y autor de 'La Renta básica'. Si ha habido proyectos previos que no han llegado a ver la luz. Uno de los últimos lo elaboró el actual ministro de Inclusión, Escrivá, cuando era presidente de la Airef. Dicha propuesta estaba enfocada en reducir las tasas de pobreza severa, es decir, aquellas personas con unos ingresos que representen el 30% del ingreso mediano. Y estimaba que con



JOAN CORTEDELLAS

ACTIVIDAD El barrio del Raval, aparentemente, ha empezado a recuperar el pulso.

una inversión bruta de entre 3.500 y 5.500 millones de euros podría sacar a 1,8 millones de hogares de la pobreza severa.

En el 2017, CCOO y UGT llevaron al Congreso de los Diputados su propia propuesta de 'prestación de ingresos mínimos'. Pretendía llegar a 1,9 millones de personas, todas aquellas que tuvieran un ingreso menor al 75% del salario mínimo de aquel entonces, que era de 707,7 euros al mes. Planteaban hacerlo mediante un pago de 430 euros mensuales y estimaba un coste de 9.931 millones de euros.

Los pocos detalles que han trascendido del ingreso que diseñan desde el ministerio de Escrivá guardan más similitudes con el modelo de la Airef que con el de los sindicatos. Esta tomará como unidad la familia. «Lo lógico sería que fuera por persona, que es donde reside el sujeto de dere-

Varios economistas consultados consideran que **el ingreso es compatible con el trabajo**

El actual ministro de Inclusión Social ya presentó **un modelo de renta estatal** contra la pobreza severa

chos. Si es por hogar puede ser más fácil para la administración, pero puede haber el riesgo de que sea el hombre el que monopolice la gestión», considera Torres.

Se desconoce la cuantía, aunque para la economista y fundadora de Ksnet, Elena Costas, «es básico fijar tramos por rentas, no puede ser que por cobrar un euro más o menos de lo que fija la ley una persona ya no pueda cobrar la prestación», afirma. También una flexibilidad por territorios, pues «no es lo mismo subsistir en Madrid que en otros sitios», añade. Ambos economistas coinciden en que un elemento clave es que dicho ingreso sea compatible con el trabajo y rechazan que el hecho de cobrarlo promueva que los beneficiarios permanezcan inactivos. «Puede ser un desincentivo para los empleos muy precarizados», señala Costas. ■

las claves de la renta mínima

1 LA PROPUESTA Beneficiará a un millón de hogares

El objetivo del Gobierno con su ingreso mínimo vital es dar cobertura a más de un millón de hogares en toda España. No han trascendido muchos detalles de la propuesta sobre la que trabaja el Ejecutivo, aunque sí que el proyecto estará enfocado a las familias.

Y priorizará a aquellas con una estructura más vulnerable, como las monoparentales. Escrivá avanzó que aspiran a garantizar un mínimo de ingresos a 100.000 familias monoparentales. También que la renta estatal, que entrará en vigor en mayo, será complementaria con todos aquellos proyectos que ya existen en las diferentes comunidades autónomas.

2 LA EXCLUSIÓN 4 millones de familias en riesgo

En España una de cada cuatro personas viven en riesgo de exclusión social, según los últimos datos del INE del 2018. Lo que equivale a unos 12 millones de personas o bien a cuatro millones de familias en todo el país. La tasa de pobreza

todavía no ha recuperado los niveles previos al estallido de la crisis financiera del 2008, cuando esta era del 23,8%. España es el séptimo país de toda la Unión Europea con una mayor proporción de personas en riesgo de exclusión social, según los datos de Eurostat. En Catalunya, la tasa de riesgo de pobreza es del 24,7%, lo que equivale a unos 1,8 millones de personas.

3 LA INFANCIA Ayudas a las familias con hijos

Antes de la crisis del Covid-19, España era el quinto país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta. En concreto, uno de cada tres niños españoles, 3,4 millones, son pobres. «La pobreza en España tiene rostro de niño, y para

resolverlo es esencial ayudar a los padres, los niños no nacen pobres», expone el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra. Esta plataforma sugiere que, mientras no se pueda aplicar la renta mínima de ingresos estatal, se ayude a los hogares mejorando las prestaciones por hijo a cargo, que en estos momentos no llegan a la «mayoría de hogares vulnerables», según Ibarra.

4 UN MODELO CRITICADO Sistema de ayudas desigual

Las rentas mínimas de se han considerado competencia de las comunidades autónomas. Por lo tanto, cada comunidad tiene una ayuda de distinta cuantía y con diferentes criterios para su acceso. «Castilla La Mancha, Andalucía o Murcia son las

comunidades donde las rentas llegan a menos hogares sin ingresos, mientras que el País Vasco, Navarra o Asturias son las comunidades con mayores tasas de coberturas», expone Guillermo Fernández, responsable de Estudios de Cáritas. En Catalunya, la Renta Garantizada penaliza a los trabajadores pobres, y a las familias que viven en habitaciones realquiladas.

5 VISIÓN INTERNACIONAL Una medida que ya pidió la ONU

Durante su visita a España a inicios de febrero, el relator de la ONU de pobreza severa, Philip Alston, incluyó en su revelador informe que España debía de aplicar una renta mínima de ingresos a nivel estatal. Esta fue una de las medidas que propuso el

relator, además de sugerir que el estado debía regular el precio de los alquileres, y que había que legislar contra el fraude fiscal y a favor de los más vulnerables. «España ha gobernado para los ricos y se ha olvidado de los pobres», sentenció el relator tras su visita, que señaló los estragos que las «políticas neoliberales de la última década» habían causado en el país.

Crisis sanitaria internacional ENTRE TODOS

MANUEL DE GRAU ▶ TRABAJADOR AUTÓNOMO DE LA CONSTRUCCIÓN

«Ahora toca rescatar a las personas»

Manuel de Grau (Guayaquil, Ecuador, 1964) ha vuelto al pasado. Para ser exactos al 2008, cuando recién llegado a Barcelona sufrió la crisis: acabó demandando a su empresa por impagos y la justicia le dio la razón. Fue entonces cuando decidió hacerse autónomo... hasta hoy. «Pertenezco a un grupo de supervivientes en vías de extinción, y lo peor está por llegar», pronostica.

Desde el 2011, De Grau trabajaba como autónomo en el sector de la construcción, concretamente en el mantenimiento del Instituto Severo Ochoa de Esplúgués de Llobregat. Allí estuvo

hasta el pasado 12 de marzo, justo antes de la activación del estado de alarma, cuando le comunicaron que no acudiera a su puesto de trabajo «hasta nuevo aviso». Una situación que le ha llevado a la «desesperación», a un «calvario». Sufrió un infarto de miocardio en el 2003 y ahora teme que la depresión y el estrés le provoquen otro.

Si bien ha recibido una buena noticia: en un plazo de 48 a 72 horas le ingresarán la prestación por cese de actividad vinculada al covid-19, unos 660 euros para la base mínima. «Mi facturación ha bajado un 100%», apunta.

De Grau asegura haber tenido grandes problemas para soli-



▶▶ Manuel de Grau ha sufrido una caída de ingresos del 100%.

citar la moratoria de créditos al consumo que la banca lanzó a principios de abril: «Llamaba al BBVA y Bankinter y, o me tenían a la espera sin contestar, o me decían que solo tramitaban moratorias hipotecarias».

Ahora, tras dos semanas intentándolo, le han comunicado que le van a tramitar su petición. «Ya les he dicho que no tengo dinero en la cuenta; no es que no haya querido, es que no he podido», afirma.

«¿Alguna de las personas en el poder se ha subido alguna vez a un andamio?», se pregunta este trabajador de la construcción, que entiende que ha llegado el momento de arrimar el hombro por el ciudadano: «Ya rescataron a los bancos en el 2008; si no rescatan ahora a las personas, ¿quién habrá para rescatar a la próxima?». MANUEL ARENAS

CORINA BONDARI ▶ PROFESIONAL DE LA HOSTELERÍA EN PARO

«Nos llega para comida e hipoteca»

Antes de que la crisis del coronavirus estallara, en enero de este año, Corina Bondari (Moldavia, 1991) acabó su excedencia en el hotel donde trabajaba como mánager. «Entonces dije que no quería volver con el horario que tenía antes de la excedencia [de tres de la tarde a once de la noche], porque no me permitía conciliar ni ver a mi hija de dieciocho meses», cuenta.

En el hotel no le ofrecieron otro trabajo y el estado de alarma golpeó fieramente al sector de la hostelería antes de que encontrara empleo. «Busqué en tiendas, pero me decían que estaba demasiado cualificada; decían que me llamarían... pero no me han llamado», relata. ¿Acep-

taría ahora el puesto con el horario que rechazó? «No. ¿Cuándo iba a ver a mi niña si hiciera eso?», responde.

Ahora, ni ella ni tampoco su marido –autónomo, protésico dental– trabajan, y el pasado 29 de enero, invirtieron todos sus ahorros en un piso. «Esta semana nos llega para comida e hipoteca», señala Bondari, quien reconoce que la certeza de que podrá comprar alimentos queda subordinada a los pagos atrasados de clientes que pueda acabar cobrando su marido.

Esta profesional de la hostelería se muestra preocupada por el excesivo endeudamiento al que se ve empujada su familia. «La deuda ya no es solo con el



▶▶ Corina Bondari se metió en una hipoteca antes del coronavirus.

banco, sino con toda la sociedad: también con la empresa de la luz, con la propietaria del negocio de mi marido... Los impuestos, igual: nos han permitido aplazarlos, pero tendremos que acabar pagándolos. ¿Y cómo, si la mayoría no tendremos ingresos?», expone.

Sobre las prestaciones, concretamente la nueva renta mínima que el Gobierno prevé aprobar en mayo, Bondari dice que no sabe si se atreve a considerarse «familia vulnerable» porque ellos sí tienen un lugar en el que poder vivir.

«Hay gente que se está echando a la calle. Nosotros tenemos al menos un año antes de que eso pueda pasar y hemos pedido ayuda a nuestros padres», admite. Los padres de familia que sufrieron la crisis del 2008 ayudan a los hijos que ocupan su rol de entonces. M. A.

SERGI FONT ▶ PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA

«Esta renta no es para apalancarse»

Sergi Font (Mataró, 1993) aún vivía con sus padres y era demasiado joven en el 2008 como para sufrir en primera persona los perjuicios de aquella crisis financiera. Sin embargo, la del coronavirus lleva ya semanas causándole daños económicos. «Tras pagar el alquiler de abril me he quedado sin nada. Ahora mismo tengo 100 euros pelados», admite Font, que ya piensa en cómo afrontará la espada de Damocles del alquiler de mayo.

Este profesor de educación física en secundaria y ciclos formativos está en las listas de Ensenyament. «Pero como están tan saturadas», explica, «he tenido que buscarme otros trabajos

vinculados al deporte y la educación». Estos empleos, ambos como asalariado, son de monitor de escalada en el rocódromo de Mataró y de monitor de comedor. En ambos casos, las empresas han aplicado un expediente de regulación temporal de empleo (erte), aunque le aseguran «tranquilidad» para cuando el estado de alarma finalice.

«Aunque estos trabajos me proporcionan un ingreso que me permite pagar el alquiler, ahora a saber cuándo me llega la prestación del Estado por el erte; y cuando me llegue, a saber cuánto es y si puedo arreglar alguna cosa con eso», agrega. «La crisis hace que no puedas ser tan in-



▶▶ A Sergi Font le han aplicado dos ertes y sufre por el alquiler.

dependiente, que seas más esclavo del sistema», reflexiona.

Sobre la nueva renta mínima, Font dice estar conforme con la medida «porque no es un dinero para que la gente se apalancue; al revés». De hecho, él se muestra «interesado» en poder acceder a una prestación de esa índole, puesto que, por ejemplo, podría ayudarlo a estudiar unas oposiciones. «Algo que actualmente no me puedo permitir», lamenta este profesor.

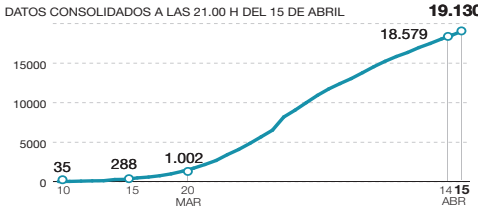
El alquiler es uno de los elementos que más ha tensionado su situación económica a lo largo de este último mes, aunque podría ser peor. «Suerte que tengo el privilegio de tener un alquiler asequible y compartir gastos con mi pareja; si estuviera solo no sé si podría asumirlo. Echo de menos más solidaridad de los propietarios», concluye. M. A.

Crisis sanitaria internacional

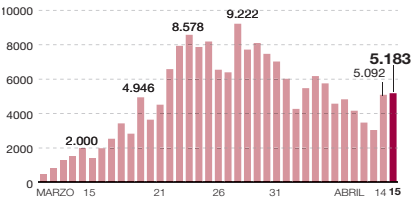
CONTAGIADOS EN ESPAÑA



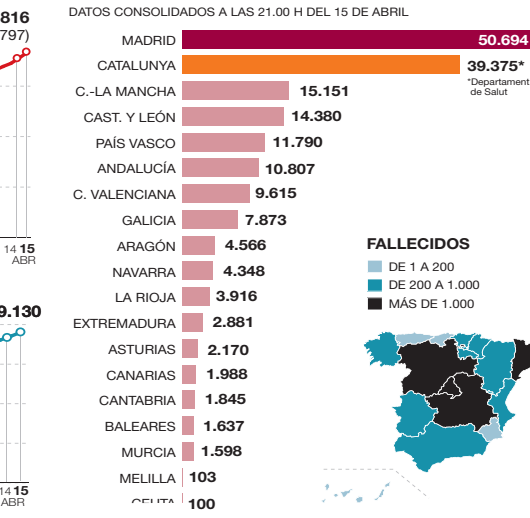
FALLECIDOS EN ESPAÑA



NUEVOS CONTAGIOS DIARIOS EN ESPAÑA



CASOS, POR COMUNIDADES



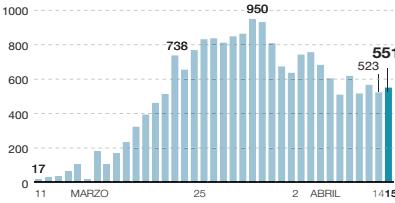
FALLECIDOS



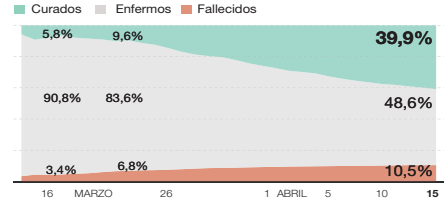
EN CATALUNYA*



FALLECIDOS CADA DÍA EN ESPAÑA



TASA DE ENFERMOS, CURADOS Y FALLECIDOS



Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

España duplica el número de tests con un mes de retraso

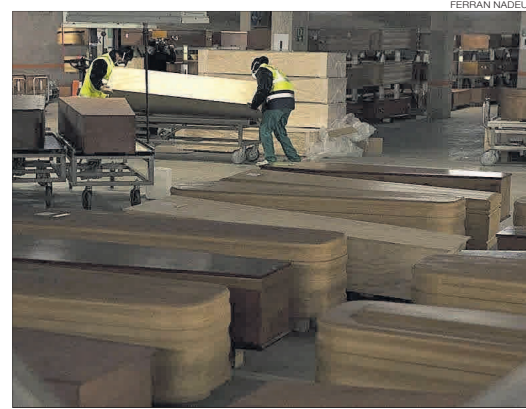
Sanidad obvia el criterio del Govern de inclur los muertos en residencias

PATRICIA MARTÍN MADRID



España ha duplicado su capacidad diagnóstica, si bien un mes después de que fuera necesario decretar el estado de alarma para confinar a la gente en sus casas y contener así el avance del coronavirus. La OMS pidió a España y otros países hacer «tests, tests y tests» hace justo un mes y un día, en línea con las reclamaciones de los expertos. De hecho, los países

que mejor han controlado la epidemia han sido aquellos que han realizado más pruebas a la población, lo que permite aislar a todos los casos y sus contactos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, informó ayer de que de 20.000 tests diarios PCR se ha pasado a realizar entre 40.000 y 47.000, lo que ha contribuido a la realización de 930.230 desde el inicio. El aumento del número de PCR, la prueba más fiable porque detecta material genético del virus, ha sido posible gracias a que el Instituto de Salud Carlos III ha validado ocho nuevos centros de investigación y universidades, de forma que ya son 13 los institutos con autorización para realizar estas pruebas, lo que se suma a los esfuer-



Ataúdes en el aparcamiento del tanatorio de Collserola.

zos llevados a cabo por las comunidades autónomas.

LOS BARRIDOS // A esto hay que añadir los tests rápidos, que detectan anticuerpos, de los que ya se han repartido dos millones a las autonomías y se están usando para hacer barridos en residencias de ancianos y hospitales. De hecho, el aumento en la capacidad diagnóstica ha provocado que el balance diario del Ministerio de Sanidad haya registrado, en los dos últimos días,

un repunte del número de contagios, que crecerá en los próximos días, pero eso no significa que haya más, sino que se detecta una bolsa oculta. Así, el recuento cifró ayer en 5.183 los nuevos positivos, 91 más que el miércoles, cuando la cifra escaló de los entre 3.000 y 4.000 casos diarios de los últimos a más de 5.000. Si bien, buena parte de los nuevos contagiados son personas asintomáticas, que se ha sabido que han pasado la enfermedad gracias a los tests rápidos.

Por contra, el recuento del Gobierno obvia la nueva contabilización sobre fallecidos de la Generalitat, que ha elevado el cómputo de unos 3.700 a 7.097. Esta nueva cifra incluye a los fallecidos en residencias y en casas particulares con evidencias médicas de sufrir el covid-19 pero sin un test que lo diagnosticara fehacientemente.

MÁS MUERTOS // Pero el informe del Gobierno sigue fiel al criterio de contabilizar exclusivamente a aquellos con un test previo positivo. En Catalunya reportó ayer 3.855 decesos y en toda España 19.130 muertes. Son 551 más en un día, lo que significa que la cifra diaria ha vuelto a crecer aunque el porcentaje de aumento se mantiene en el 3%.

El director del centro de emergencias, Fernando Simón, señaló que el Gobierno tiene que «discutir» con la Generalitat «qué significan» los datos extraídos de las funerarias porque el Ejecutivo no tiene seguridad de que tengan un «diagnóstico previo». Pese a ello, ante las críticas por no contabilizar a todos los fallecidos, el Ejecutivo pidió hace días a todas las autonomías que le informen de los muertos en residencias, pero dice que no todas le han facilitado datos. ■

Salut solo testará a 1 de cada 3 ancianos en residencias

● Hará unas 27.000 pruebas en centros de la tercera edad, salud mental y discapacidad

● Familias de muertos denunciarán ante la fiscalía que no fueron trasladados al hospital

BEATRIZ PÉREZ
BARCELONA

La Conselleria de Salut de Catalunya prevé realizar, hasta el 8 de mayo, unos 27.000 tests de coronavirus en residencias de ancianos, de salud mental y de discapacidad, tanto a usuarios (asintomáticos o no) como a profesionales. Salut calcula que esta cifra alcanzará para que estén testadas «todas las residencias», aunque solo la cifra de ancianos en estos centros es de 64.093, según la Conselleria d'Afers Socials. Además, hay 8.122 plazas en residencias para personas con discapacidad y 2.045 para aquellas con problemas de salud mental. Esos 27.000 tests solo llegarán al un 36% de todos estos usuarios. Y, en concreto, a más o menos uno de cada tres ancianos.

Desde el inicio de la pandemia, se han realizado 8.600 pruebas PCR en 604 residencias de estos tres tipos. Así lo explicó ayer



► Voluntarios de Proactiva Open Arms trasladan a personas mayores de un centro de Barcelona.

Los geriátricos «medicalizados» donde serán agrupados algunos abuelos tendrán «oxígeno»

Yolanda Lejardi, directora asistencial de atención primaria. El lunes, los Bombers de Barcelona comenzaron a hacer PCR en residencias de ancianos. Al día siguiente se unió la oenegé Proactiva Open Arms.

La gestión por parte de la Generalitat de Catalunya de las residencias de ancianos durante esta

pandemia de coronavirus ha sido objeto de fuertes críticas. En territorio catalán, han muerto 2.000 personas mayores por covid-19 en estos centros. Ayer Marea Blanca y familiares de ancianos ingresados en residencias anunciaron que denunciarán ante la fiscalía que no se les haya derivado a hospitales cuando estaban enfermos. Según los familiares, los muertos son muchos más de los que facilita el Gobierno.

«SECTORIALIZAR» // Estas 27.000 pruebas de Salut permitirán «sectorializar» residencias y ubicar dentro del mismo espacio a residentes o buscarles una alternati-

va si fuera necesario. Para Salut, dijo Lejardi, es prioritario «hacer un seguimiento» del mapa de residencias de Catalunya, «identificar espacios nuevos para reubicar pacientes con o sin covid-19».

Como avanzó EL PERIÓDICO, Salut prevé trasladar a ancianos que vivan en residencias de la tercera edad y hayan enfermado de coronavirus a grandes geriátricos, donde también vivirán personas sanas pero muy dependientes. Estos geriátricos no tendrán ucis, pero sí estarán «medicalizados». Por «medicalizados» Salut entiende que tendrán camas «con oxígeno», puntualizó la 'consellera' Alba Vergés. ■

Naturgy dará servicio gratis a sanitarios y policías

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Naturgy regalará un año de reparaciones eléctricas y de gas al personal en la primera línea de la lucha contra el covid-19. La medida incluye a todo tipo de personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los militares y los bomberos. El colectivo que recibirá la ayuda, hasta junio del 2021, está integrado por más de un millón de personas.

La multinacional energética señaló, en un comunicado, que ofrecerá sin coste un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas, así como para electrodomésticos y gasodomésticos, a estos profesionales, sean o no clientes de Naturgy.

Con el lema *Ahora nos toca a nosotros cuidar de vosotros*, quiere agradecer la entrega de estos profesionales durante las últimas semanas, según detalla la compañía. «La sociedad tiene una deuda con estos profesionales. Su generosidad y su dedicación son ejemplo para todos», asegura el presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

El servicio es para los domicilios particulares de los beneficiarios, con una potencia eléctrica contratada inferior a los 10 KW. Para acogerse a la ayuda, los profesionales deberán acreditar su condición laboral a través de los formularios disponibles hasta el próximo 31 de mayo en la página web de la compañía. ■

MATERIAL IMPRESCINDIBLE

El Govern mueve las 1.400.000 mascarillas que tenía arrinconadas

● La lentitud de la Generalitat enerva a municipios como BCN

GUILLEM SÁNCHEZ
BARCELONA

El Govern destinará a geriátricos de Catalunya el grueso de las 1.714.000 mascarillas enviadas por el Estado el pasado lunes y que todavía no han sido distribuidas. La decisión se tomó ayer por la tarde pero llega tras dos días de malestar en el Ayuntamiento de Barcelona, que exigía

más celeridad en la distribución de las protecciones faciales contra el coronavirus. El reparto de las 1.400.000 sobrantes tras las 300.000 entregadas en estaciones de transporte público se hará «en los próximos días».

Estas son las mascarillas de la polémica generada por el 'conseller' Miquel Buch, que cargó contra el Estado creyendo que la cifra global de 1.714.000 unidades enviadas a Catalunya encerraban una provocación oculta por parte del Gobierno español para satirizar el año 1714, «una fecha



► Una voluntaria entrega una mascarilla en el metro.

nefasta para los catalanes», vindicó en una rueda de prensa en la que también protestó airadamente porque eran demasiado pocas. Sin embargo, las mascarillas llegaron el lunes y desde entonces la Generalitat solo ha dis-

tribuido 300.000 en estaciones de tren, metro y autobús. El propio 'conseller' de Interior explicó que este sistema de reparto no agradó al Govern, dado que muchos de los trabajadores se desplazan a sus puestos en vehí-

culo particular. Por ese motivo, decidió interrumpirlo y meditar qué hacer con las sobrantes.

El tiempo empleado en decidir el nuevo sistema de reparto ha ido enervando al ayuntamiento que gobierna Ada Colau, que no alcanzaba a comprender por qué el grueso de las mascarillas continuaba ayer por la tarde en almacenes y no en manos de los ciudadanos, según apuntaron fuentes municipales.

LA CONSIGNA DEL ESTADO // En una reunión, ayer, a las seis de la tarde, Protecció Civil de Catalunya resolvió que serán enviadas a residencias de la tercera edad y organismos de ámbito social, la misma consigna que habían recibido por parte del Estado.

La Conselleria de Salut, por su parte, había valorado que, por sus características técnicas, las mascarillas eran aptas para trabajadores de geriátricos. ■

Crisis sanitaria internacional

Sánchez suma presión al PP tras el aval de los minoritarios

El Gobierno insta a Casado a unirse al diálogo, aún sin fecha para la primera cita

La llamada mesa de reconstrucción echará a andar la semana que viene

IOLANDA MÁRMOL
MADRID



Pedro Sánchez logró ayer que los partidos minoritarios se sumen al diálogo para poner en marcha una mesa de reconstrucción social y económica la semana que viene. Es solo un primer paso, pero también un espaldarazo con el que consigue imprimir cierta presión al PP, que continúa sin concretar cuándo está dispuesto Pablo Casado a reunirse con el presidente para abordar la posibilidad de tejer un acuerdo que permita a España salir de la crisis con la mayor rapidez y fortaleza posible.

El Gobierno podría intentar poner en marcha la mesa de reconstrucción con los mismos apoyos con los que consiguió la investidura de Sánchez en enero, pero entiende que la ocasión es tan dramática que la participación del PP resulta especial-

mente necesaria. «Estamos todavía pendientes de concretar ese momento, esa fecha. Esperamos que se haga a la mayor brevedad posible. El país no entendería que el principal partido de la oposición se autoexcluyera de esta mesa», subrayó la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa de valoración de la primera ronda de contactos.

«El diálogo será necesario si o sí. Al Gobierno le gustaría contar con el concurso del PP», insistió, insinuando que si Casado no se suma quedaría alineado con Vox, su gran adversario en la derecha, que ya ha adelantado que no cuentan con ellos.

SUAUIZAR LAS RELACIONES // En el mientras tanto, el presidente ha ido tejiendo otras complicidades, tratando de suavizar unas relaciones con el resto de partidos que también se han visto erosionadas por la gestión de la



►► Pedro Sánchez habla por videoconferencia, ayer, con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.



M. Jesús Montero
PORTAVOZ DEL GOBIERNO

«El pacto avanza, está cada vez más cerca. Esperemos que este viernes [por hoy] haya buenos resultados»

pandemia. La oposición le ha reprochado la unilateralidad en algunas medidas y la escasa comunicación con los partidos. Sánchez se esforzó por reconducir esas alianzas ayer con un resultado positivo. El aval de sus socios de Podemos se daba por descontado, pero también consiguió sumar a la mesa de reconstrucción a Ciudadanos (en pleno giro estratégico), PNV, JxCat, Más País, Compromís y, quizá, a un BNG que aún alberga dudas y concretará su posición en breve. «El pacto avanza, está cada vez más cerca», dijo Montero a última hora de la tarde.

La intención de Sánchez es que el diálogo para la reconstrucción se vertebrase en tres ejes: la mesa de partidos, los territorios (autonomías y ayuntamientos)

y agentes sociales (patronal y sindicatos). Desde esos tres vértices la idea es definir qué franjas de la población requieren ayudas, qué sectores económicos necesitan ser relanzados con estímulos económicos y cómo fortalecer el Estado del bienestar (sanidad, educación, dependencia). Las prioridades se incluirán, además, en los Presupuestos del 2021, apuntó Montero.

Los portavoces de JxCat, Laura Borrás, y del PNV, Aitor Esteban, recordaron que sus partidos no apuestan por reforzar el Estado de las autonomías, como propone Sánchez. Desde Barcelona, el *president*, Quim Torra, concretó que llevarán su petición de independencia también a esa mesa. Hoy la ronda seguirá con ERC y Bildu. ■

La implementación de una medida tan razonable y necesaria como un ingreso mínimo vital ha venido acompañada de un debate tan confuso como agrio. Así, las mal gestionadas diferencias en el seno del Gobierno han sido magnificadas por una oposición que, sin asumir la gravedad del momento, sigue priorizando el deteriorar a la coalición de izquierdas.

Esta renta mínima, ya considerada en los países avanzados que padecen las secuelas del covid-19, responde a la dramática personalidad de una crisis que ha hecho que los más de tres millones de parados de hace unas semanas se estén acercando, hoy, a los nueve millones, al sumárseles los afectados por artes y los muchos autónomos que se han quedado de brazos cruzados. Ante tanta tragedia, solo se puede transitar hacia la normalidad

Análisis

Jordi Alberich
ECONOMISTA



Es urgente y necesario un ingreso mínimo

perdida si las administraciones inyectan liquidez directamente a las empresas y, también, a las familias. Sin embargo, esta medida, orientada a las personas más vulnerables, genera desconcierto en un doble sentido.

Por una parte, por su convivencia con otras rentas mínimas, que ya venían experimentándose a nivel autonómico. En este sentido, cabe diferenciarlas claramente, pues mientras estas responden a una situación de

Solo se puede transitar hacia la normalidad si se inyecta liquidez a empresas y familias

normalidad y se limitan a colectivos determinados a los que acompañar en su camino de la marginalidad a la ocupación, el mínimo vital es de carácter general, orientado a todas las familias vulnerables, para que

puedan acceder a los bienes indispensables en estos meses de confinamiento.

Por otra, al desconcierto contribuyen aquellas posiciones extremas que pretenden aprovechar el desastre para llevar el agua a su respectivo molino. Así, mientras la izquierda más radical señala que este ingreso ha venido para quedarse, los ámbitos más conservadores se rebelan ante cualquier asomo de generalización, convencidos de que una renta mínima no haría más que favorecer una actitud displicente por parte de millones de ciudadanos, que se acostumbrarían a la vagancia.

En función de la coyuntura

Lejos de unos y de otros, debe entenderse este ingreso mínimo vital como una medida de emergencia ante una situación temporal y dramática. A medida que vayamos regresando a una

cierta normalidad, será el momento de, atendiendo a la coyuntura que nos encontremos, decidir qué conviene hacer con el ingreso: suprimirlo, reorientarlo o darle continuidad.

En cualquier caso, esta medida resulta hoy necesaria y urgente. Las energías y el debate deben orientarse a conseguir el mayor acuerdo posible entre partidos y agentes sociales. Y hacerlo empezando por el más sencillo y, a la vez, trascendental: alcanzar una posición común en política europea. La negociación que se avecina entre norte y sur resultará durísima, pues el gran pacto no se formalizará tanto en la Moncloa, como en Bruselas. Que los grandes partidos no hayan alcanzado dicho acuerdo, y se dediquen a acusar al otro de los muertos, es de una bajeza extraordinaria. La propia de quien se deja llevar por el «cuanto peor, mejor». ■

El 'pasaporte anticoronavirus' amenaza derechos básicos



►► Un trabajador sanitario hace un test rápido a un conductor en el municipio de Pozzuoli, cerca de Nápoles.

► **Empresas estudian aplicar un registro para saber qué trabajadores son inmunes al virus**

► **Algunos abogados dudan de su legalidad y piden primero medidas menos invasivas**

CARLES PLANAS BOU
BARCELONA

Con el retorno parcial de ciertos sectores económicos, las grandes empresas de España empiezan a prepararse para el escenario de desconfinamiento con medidas que hasta hace poco costarían de creer. Una de las ideas más estudiadas es la introducción del pasaporte sanitario, un documento digital que verifique qué empleados son inmunes al coronavirus covid-19. Los que hayan desarrollado anticuerpos serán los primeros en regresar al trabajo.

Como avanzó este lunes *El Confidencial*, grandes nombres del Ibex 35 que operan en todos los sectores barajan la implanta-

ción de medidas para optimizar sus trabajadores evitando una mayor exposición al virus. Una de esas serían los tests serológicos masivos para detectar qué parte de la plantilla es inmune y, por lo tanto, puede trabajar sin a priori exponer al resto.

El Gobierno de Castilla y León y algunos investigadores han abogado por la creación de este documento de identificación, iniciativa que el Ministerio de Sanidad de momento rechaza. Este lunes se levantó parte de la parálisis de la actividad económica para permitir que ciertos sectores como el industrial reactiven su funcionamiento. En paralelo, se puso en marcha un plan de tests para 62.000 ciudadanos para conocer mejor el impacto de la pandemia.

Científicos de todo el mundo trabajan ya para encontrar una vacuna que frene la propagación de la pandemia, pero mientras esa solución médica no llega—según las estimaciones de la Agencia Europea del Medicamento no estará lista antes de un año—la economía busca maneras de seguir su curso. Hemos hablado con abogados expertos en derecho laboral e informático sobre esta controvertida idea.

1 ¿Es la aplicación de un pasaporte sanitario legal?

Es una cuestión compleja, pues en ella colisionan el derecho a la integridad física de la plantilla y el derecho a la privacidad del empleado. «Negar el acceso al trabajo es difícil, hay que ponderar los derechos en cada caso, ya que pueden generarse discriminaciones», explica David Maetzu, abogado socio de 451 Legal. «No se recomiendan las medidas generales».

Natxo Parra, abogado del Col·lectiu Ronda, duda de la legalidad de la propuesta. «Es una invasión de la privacidad que implica una discriminación demasiado grande», explica. Los datos médicos son especialmente sensibles, lo que les otorga una mayor protección legal.

Para la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsp) el pasaporte sanitario supondría una «limitación de las libertades y derechos fundamentales por motivo de salud».

Aunque la ley de prevención de riesgos laborales (LRL) permite a las empresas la adopción de medidas de seguridad para

asegurar la salud de sus trabajadores eso se aplica solo en casos críticos como pilotos de avión o empleados de una central nuclear. «Si se justifica con la idea de evitar el contagio antes hay que agotar otras posibilidades menos lesivas», remarca Parra.

2 ¿Puede esta medida ser útil contra el virus?

Más allá de la legalidad, también hay dudas de su utilidad, pues se desconoce por cuánto tiempo se inmunizan las personas que han desarrollado anticuerpos frente al Covid-19. Corea del Sur ha reportado casi un centenar de casos de contagio entre personas que se creían curadas.

3 ¿Qué datos podrían pedir las empresas?

El hecho de que se trate de información tan sensible como la médica dificulta aún más este mecanismo. «La empresa sólo puede saber si el trabajador es apto, no qué enfermedades tiene», explica Maetzu. Así, sólo podría solicitar los datos para identificar si el empleado puede trabajar,

como un reconocimiento médico, pero sin más detalles.

4 ¿Existe el DNI sanitario en otros países?

El DNI sanitario existe en Corea del Sur y China; la información médica de los ciudadanos se almacena en sus móviles; cuando van a un sitio público las autoridades escanean esa credencial en forma de código QR para conocer su estado de salud y, en función de eso, permiten o deniegan su acceso. Alemania, Italia, el Reino Unido o Chile también estudian la aplicación de ese pasaporte de inmunidad.

Las empresas anticipan su respuesta. PwC, una de las cuatro grandes consultorías del mundo, ha puesto en marcha en España un pasaporte sanitario que permite compartir los datos de los laboratorios y conocer en tiempo real si los ciudadanos han estado contagiados. En EEUU, Amazon está desarrollando un laboratorio propio para evaluar a sus empleados.

5 ¿Qué medidas menos invasivas existen?

Los especialistas en medicina preventiva (Sempsp) rechazan el uso de pasaportes serológicos y han pedido «hablar más» de medidas de higiene en el trabajo. Así, el organismo cree que es necesario priorizar el teletrabajo y, en caso de un trabajo asistencial, la empresa debe facilitar Equipos de Protección Individual (EPIs) como las soluciones hidroalcohólicas, mantener la distancia entre trabajadores y desinfectar esos puestos.

6 De aplicarse, ¿qué peligros podría tener?

Los expertos coinciden en el temor de que tal excepción se convierta en algo permanente. El pasaporte sanitario podría llegar a ser utilizado como certificado de salud para el uso de transportes o para eventos masivos como conciertos. El miércoles, Emirates Airlines se convirtió en la primera compañía aérea que realiza tests a sus pasajeros. «Los datos que se están cediendo hoy por una emergencia mañana pueden servir para denegarnos seguros médicos», explica Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en derecho informático del Bufet Almeida.

Las empresas incluso barajan la opción de registrar a familiares de empleados, algo que para Parra significaría una vulneración «aún mayor» de los derechos fundamentales. ■